

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 030 - 2014-GRJ/GGR

Huancayo, 10 MAR 2014

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

### VISTO:

El Informe Legal N° 129-2014-GRJ/ORAJ de fecha 06 de marzo de 2014, y el Reporte N° 057-2014-GRJ/ORAF con fecha de recepción del 05 de marzo de 2014, con el que elevan el Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Administrativa N° 127-2014-GRJ/ORAF de fecha 12 de febrero de 2014, interpuesto por el ex servidor **LUIS AVENDAÑO ORTIZ**;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito de fecha 27 de setiembre de 2013, el ex funcionario **LUIS AVENDAÑO ORTIZ**, solicita renovación pensionable, en vista que el año 1991, solicitó se le considere como servidor en el nivel F1, como contador de la Oficina de la Dirección entonces COREJUNIN, petición no atendible en aquella oportunidad, por ello solicita se le otorgue el nivel que le corresponde;

Que, mediante Resolución Directoral Administrativa N° 829-2013-GRJ/ORAF del 28 de noviembre del 2013, se declaro infundado el petitorio por lo que el ex servidor **LUIS AVENDAÑO ORTIZ**, con fecha 06 de diciembre de 2013, interpuso recurso de reconsideración contra el referido acto resolutivo; el mismo que mediante la Resolución Directoral Administrativa N° 127-2014-GRJ/ORAF de fecha 12 de febrero de 2014, se declaro infundado;

Que, mediante el recurso de fecha 20 de febrero del 2014, el ex servidor **LUIS AVENDAÑO ORTIZ**, interpuso recurso de apelación contra la mencionada Resolución Directoral Administrativa N° 127-2014-GRJ/ORAF de fecha 12 de febrero de 2014, argumentando que se le está negando un derecho reconocido por la Ley y la Constitución, no siendo cierto lo afirmado por la apelada sobre el retorno a su plaza de carrera el 31 de diciembre del año 1988, agregando que conforme a la primera disposición transitoria de la ley de presupuesto, señala al régimen del D.L. N° 20530, para que todo los órganos del estado completan el monto de las remuneraciones actuales con un régimen de asignaciones o dietas no pensionables, hasta los límites remunerativos establecidos en la Ley, mientras subsistan disposiciones constitucionales y legales, por lo que deben abonarse la totalidad de sus remuneraciones hasta el monto de su cese como funcionario;

Que, conforme a lo establecido por el artículo 206 de la ley 27444, frente a un acto administrativo que viola, desconoce, o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa;

Que, conforme a lo establecido por el artículo 207 de la ley N° 27444, el recurso impugnatorio de apelación debe ser interpuesto en el plazo de 15 días luego de notificado;

Que, conforme es de verse de la fecha de presentación de la impugnación y el acto impugnado, el recurso impugnatorio de apelación ha sido presentado dentro del plazo legal;

Que, los derechos laborales no son imprescriptibles y el plazo prescriptorio opera desde el momento en que se produce la afectación. En ese sentido el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 04272-2006-AA/TC, señala textualmente:

"4 Sobre el primer punto, este Colegiado ha venido asumiendo una tesis según la cual se dejaba entrever una cierta homologación entre "imprescriptibilidad" e "irrenunciabilidad" de los derechos laborales, de modo que estos no tenían plazo de prescripción para reclamarlos judicialmente. En tal sentido, en la STC 1183-2001- AA/TC se estableció que, "( ) habida cuenta de que los actos por los que se reclama tutela se encuentran asociados a derechos constitucionales de contenido laboral, debidamente adquiridos al amparo de la Constitución de 1979, por lo que su contenido es irrenunciable y, por ende, imprescriptible, conforme al artículo 57 de dicha Carta ( ..)" (fundamento 2)

5. Sin duda, esta tesis no se corresponde con lo que ocurre con la regulación actual de los procesos constitucionales, los que están sujetos a un plazo de prescripción respecto de su reclamo en la vía de los procesos constitucionales (artículo 5.10 del Código Procesal Constitucional) Para el caso de los derechos de naturaleza laboral, este Tribunal considera necesario variar el criterio adoptado y que se referido supra, pues una cosa es la irrenunciabilidad de los derechos, esto es, su naturaleza inalienable en su condición de bienes fuera de la disposición, incluso llegado el caso, de sus propios titulares (por ejemplo, no podría argumentarse válidamente que un trabajador "ha renunciado" al pago de sus haberes), y otra cosa distinta es la "sanción" legal que se impone al titular de un derecho que, tras su agresión, no ejercita el medio de defensa en un lapso previsto normalmente en la ley. De este modo, la figura jurídica de la prescripción no supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino, en todo caso, la restricción del remedio procesal para exigirlo, lo cual no debe olvidarse, constituye también la defensa de otro bien constitucional en la medida que se protege por ésta vía la seguridad jurídica. En efecto, la prescripción no opera por la "voluntad" del trabajador, sino por un mandato de la norma que sanciona su negligencia en pos de la seguridad jurídica. Adicionalmente, cabe anotar que la prescripción es una institución que ha gozado de rango constitucional en nuestro ordenamiento (precisamente, en la Constitución de 1979 que el recurrente reclama aplicable al presente caso)<sup>[1]</sup>

6. Por otro lado, los derechos laborales, como cualquier otro derecho, requieren de cierta diligencia por parte de su titular para garantizar su ejercicio. Es por esto que el Estado, a través de las reglas procesales, ha establecido plazos en los cuales estos pueden hacerse valer, de modo de preservar un sistema de protección que no sea incierto en el tiempo y que permita, al propio tiempo, que tanto trabajadores como empleadores conozcan los límites temporales de sus obligaciones y derechos. El desconocimiento de estos plazos por parte de los tribunales sólo generaría incertidumbre en los operadores del derecho y, a la postre, restaría legitimidad al propio modelo de tutela de los derechos que la Constitución garantiza.

7 Respecto de la fecha en que opera el cómputo del plazo para efectos de la prescripción, conforme lo establece el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, es "desde el momento en que se produce la afectación". En el caso de autos, la supuesta afectación ocurre con el despido del trabajador, hecho que aconteció el 31 de mayo de 1996" (1)

Que, al respecto, debe invocarse el artículo 1 de la ley N° 27321 del 07 de julio del 2000, que establece que las acciones derivadas de la relación laboral,

prescriben a los 04 años desde el día siguiente en el que se extingue la relación laboral;

Que, el apelante manifiesta haber sido cesado el año 1991; por lo que el 27 de setiembre del 2013 solicitó su "**renovación pensionable**"; esto es, luego de casi 22 años de producida la supuesta afectación a su derecho, **cuando ya había prescrito su derecho**. Al respecto es menester aclarar que el marco legal nacional, se adecúa a la teoría de los hechos cumplidos, es decir que los efectos o hechos que se produzcan o cumplan luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 27321 se rigen por ésta;

Que, el apelante ex servidor **LUIS AVENDAÑO ORTIZ**, pretende que se le incremente las pensiones de cesantía que percibe bajo el régimen pensionario del D.L. N° 20530, pues afirma haber desempeñado un cargo directiva por más de un año, en calidad de Jefe de la Oficina de Contabilidad de la entidad;

Que, dentro de los principios establecidos en el Artículo IV de la Ley del procedimiento Administrativo General N° 27444, tenemos en primer orden al principio de Legalidad, por el cual las autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas;

Que, por ello es menester invocar el Artículo 4 de la Ley N° 28449, que señala: "Esta prohibida la nivelación de pensiones y con cualquier ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad";

Que, en este orden de ideas, debemos concluir que es improcedente atender su petitorio de incremento de pensiones, porque contraviene el espíritu del Artículo 4 de la ley N° 28449, así como por haber prescrito su derecho;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 495-2012-GR-JUNIN/PR de fecha 22 de noviembre del 2012, se le delega al Gerente General Regional, la facultad de resolver en última instancia administrativa los recursos impugnatorios de apelación formulados por los administrados, que dispone: "El cumplimiento de la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional Junín", contando con el visado de la oficina Regional de Asesoría Jurídica;

#### **SE RESUELVE:**

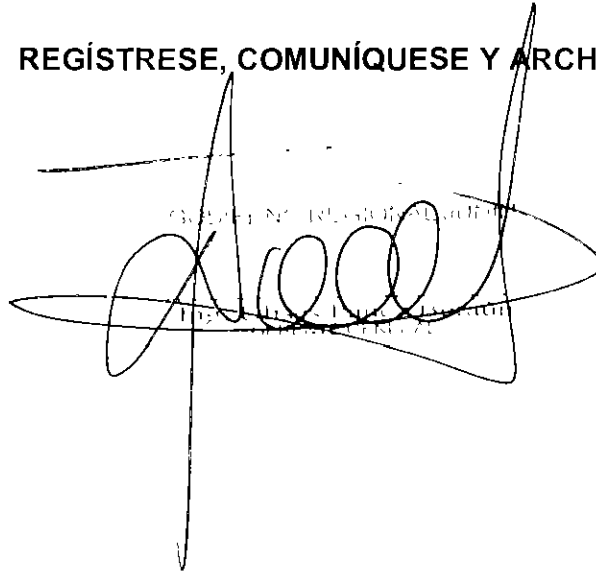
**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARESE INFUNDADO** el recurso de apelación presentado por el administrado ex servidor **LUIS AVENDAÑO ORTIZ**, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 127-2014-GRJ/ORAF de fecha 12 de febrero de 2014, por contravenir el Artículo 4 de la Ley N° 28449 y por haber prescrito su derecho.

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

**ARTÍCULO SEGUNDO: DAR** por agotada la vía administrativa.

**ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR** copia de la presente resolución al interesado y demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
GERENCIA GENERAL REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 100  
JUNIN, PERU